

Editorial

Necesaria cautela con las cuentas públicas

El compromiso asumido ayer por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en el Senado de volver a bajar el IRPF a lo largo de esta legislatura resulta sorprendente. Si bien es cierto que esa propuesta estaba incluida en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y en las del pasado 26 de junio, la realidad presupuestaria de nuestro país, además de los compromisos de gasto asumidos recientemente por el Gobierno del PP, harán muy complicado que Montoro pueda dar cumplimiento a este anuncio. De hecho, el propio titular de Hacienda reconoció en esa misma sesión parlamentaria que España afronta en este 2017 "el año más difícil" en términos de consolidación fiscal. Ajustarse al exigente objetivo de déficit público marcado por la Comisión Europea, el 3,1% del PIB frente al 4,6% previsto para 2016. De hecho, el propio Ejecutivo comunitario ya alertó a nuestro país en noviembre que, de no adoptar medidas de ajuste adicionales, se desviaría en siete décimas sobre el tope fijado para este año. Sin embargo, el ministro volvió a mostrar ayer una fe ciega en que las medidas ya adoptadas –fundamentalmente, las modificaciones al alza en el Impuesto sobre Sociedades– y un crecimiento de la economía mayor al previsto por Bruselas permitirán lograr el objetivo.

Pero, como hemos advertido desde estas páginas, el Ejecutivo no debería caer en la complacencia ante la perspectiva de un dinamismo del crecimiento económico que podría disolverse durante los próximos meses si se sustancian los crecientes riesgos externos que amenazan a nuestro país. Ya el ministro de Economía, Luis de Guindos, alertó este lunes que los elevados déficit y deuda públicos suponen las principales vulnerabilidades de la economía española ante un posible encarecimiento de los costes de financiación, ya sea por el regreso de las tensiones a los mercados de deuda o porque el BCE se vea forzado a seguir la senda de subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense para contener la incipiente inflación en la zona euro. Por eso, convendría que el Gobierno se reserve el suficiente margen fiscal para hacer frente a un potencial escenario adverso. La mejor manera de hacerlo sería no asumir nuevos compromisos de gasto, y aún menos financiarlos vía deuda, ya que las agencias de calificación han alertado a nuestro país frente a la tentación de seguir engordando el pasivo estatal o asumir otra desviación presupuestaria.

El Gobierno no debería caer en la complacencia debido a la acumulación de riesgos externos

Otro año de récord para el turismo español

No por esperado debe ser minusvalorado el nuevo récord de visitantes extranjeros logrado por la industria turística española durante el año pasado. El registro de 75,3 millones de turistas llegados a los destinos nacionales durante 2016 confirma que este sector ha sabido aprovechar la coyuntura favorable propiciada por las tensiones geopolíticas en algunos de los países competidores para atraer cada año a un mayor número de visitantes que antes se decantaban por otros destinos rivales. Además, las empresas han sido capaces de diversificar y ampliar su oferta, como demuestra el hecho de que esté aumentando tanto la facturación del sector como el gasto diario por turista pese a que los viajes son más cortos. Algo que ofrece un potencial de crecimiento que llevó ayer al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a afirmar que nuestro país está lejos aún de haber tocado techo en la llegada de turistas. Pero para ello será imprescindible seguir renovando las instalaciones del sector, potenciar alternativas como el turismo de interior, hacer más eficaz la captación de visitantes en mercados emisores que actualmente tienen una escasa participación de la demanda turística hacia España y, sobre todo, que las administraciones autonómicas y locales no pongan nuevas trabas regulatorias al desarrollo de esta industria. Por desgracia, este último aspecto es el talón de Aquiles del sector, por lo que el Ejecutivo debería poner freno al ataque ideológico injustificado contra los empresarios turísticos de ayuntamientos como el de Barcelona.